



Asamblea General

Distr. general
14 de enero de 2014
Español
Original: francés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria en su 67º período de sesiones
(26 a 30 de agosto de 2013)**

Nº 25/2013 (Marruecos)

Comunicación dirigida al Gobierno el 25 de junio de 2013

Relativa a: Ali Aarrass

El Gobierno no respondió a la comunicación.

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42, que prorrogó y especificó el mandato del Grupo de Trabajo en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación arriba mencionada.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de

GE.14-10267 (S) 050214 050214



* 1 4 1 0 2 6 7 *

Se ruega reciclar



Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. El caso fue transmitido al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como sigue.

4. El Sr. Ali Aarrass, de nacionalidad marroquí y belga, nacido el 4 de marzo de 1962 en Farkhana (región de Nador) en Marruecos, está casado y tiene una hija pequeña. Tiene domicilio habitual en la calle General Palafox N° 16 Bajo, Melilla (España) y es de profesión porteador.

5. El 1 de abril de 2008, el Sr. Aarrass fue detenido y mantenido en prisión preventiva en Algeciras (España) con miras a su extradición a Marruecos. Esta detención se llevó a cabo en el marco de una orden de detención internacional dictada el 25 de marzo de 2008 por el Procurador del Rey ante el Tribunal de Apelación de Rabat, en relación con un procedimiento penal instruido contra varias personas acusadas de pertenecer a una red terrorista denominada "Belliraj", por el apellido del principal imputado.

6. Según la fuente, el Sr. Belliraj mencionó en primer lugar al Sr. Aarrass en el curso de la investigación preliminar durante la cual estuvo recluido en régimen de incomunicación antes de retractarse ante el juez de instrucción, afirmando haber sido torturado brutalmente para que hiciera confesiones falsas. En el curso de las actuaciones, el Sr. Belliraj confirmó que había sido torturado para que comprometiera a otras personas.

7. La fuente afirma que, como parte de este caso, se inició una investigación en España sobre los mismos hechos, que dio lugar a una decisión de sobreseimiento en favor del Sr. Aarrass. Sin embargo, la justicia española mantuvo en examen el procedimiento de extradición y finalmente accedió a la petición de las autoridades marroquíes. El Consejo de Ministros de España validó esta decisión el 19 de noviembre de 2010.

8. El 25 de noviembre de 2010, en razón del riesgo inminente de extradición de su mandante, los Sres. Dounia Alamat y Christophe Marchand, abogados de Bruselas, y el Sr. Mohamed Ali Nayim, abogado de Melilla, transmitieron una comunicación urgente al Comité de Derechos Humanos instándole a que adoptara medidas provisionales para impedir la devolución forzosa del Sr. Aarrass.

9. El 26 de noviembre de 2010, el Comité de Derechos Humanos accedió a la petición de los abogados, instando expresamente al Estado parte, España, a que no extraditara al Sr. Aarrass a Marruecos hasta que se adoptara una decisión definitiva a este respecto.

10. El 14 de diciembre de 2010, las autoridades españolas procedieron a extraditar al Sr. Ali Aarrass al aeropuerto de Casablanca. No se informó a su familia ni a sus abogados de esta medida.

11. La fuente informa de que cuando el Sr. Aarrass llegó al aeropuerto de Casablanca, fue conducido esposado a un vehículo en el que lo esperaban otros agentes de policía que le cubrieron los ojos con una venda negra y lo condujeron a Temara. Según la fuente, al salir del vehículo el Sr. Aarrass fue golpeado violentamente e insultado por varias personas y luego desnudado por completo y llevado a una habitación en la que reinaba una oscuridad absoluta.
12. El Sr. Aarrass fue torturado sin cesar durante cinco días en el transcurso de los cuales fue golpeado, sometido a descargas eléctricas y al método del "submarino", que lo hizo desvanecerse. También se lo amenazó con violación y se lo privó del sueño, de alimentos y de agua. Se le inyectaron sustancias que le produjeron una crisis de demencia, seguida de un estado de inconsciencia.
13. Luego el Sr. Aarrass fue conducido a la casa de un pariente en Nador. El objetivo era forzar al Sr. Aarrass a que revelara información sobre las armas que presuntamente se ocultaban en casa de esta persona. Como no se hallaron armas, fue llevado a una comisaría de la policía local donde nuevamente se lo torturó durante toda la noche. A la mañana siguiente, se lo condujo a un bosque vecino, donde fue objeto de un simulacro de ejecución.
14. Por último, el Sr. Aarrass fue trasladado nuevamente a la Dirección de Vigilancia del Territorio en Temara, donde se lo sometió a nuevas sesiones de tortura semejantes a las del día de su llegada durante tres días, seguidas de otro simulacro de ejecución.
15. El 23 de diciembre de 2010 el Sr. Aarrass fue llevado a la brigada nacional de la policía judicial (BNPJ) de Casablanca y trasladado al día siguiente a la Fiscalía del Tribunal de Apelación de Salé, en un estado físico y psicológico deplorable. Según se informó, no estaba en condiciones de hablar, ni de moverse, ni siquiera de permanecer de pie.
16. El juez de instrucción nombrado por el Procurador del Rey procedió a un interrogatorio sumario, sin la presencia de un abogado. Los allegados del Sr. Aarrass se enteraron de esta presentación ante un juez el 27 de diciembre, por los medios de comunicación. Ese mismo día tuvo lugar el primer contacto con un abogado, en presencia del subdirector de la prisión de Salé, acompañado de guardias.
17. El juicio contra el Sr. Aarrass, acusado de "participación en una red terrorista y de tráfico de armas" tuvo lugar el 24 de noviembre de 2011. La acusación no presentó ningún elemento material y se fundamentó únicamente en las actas tomadas en el centro de Temara, firmadas bajo coacción y redactadas en árabe, idioma que el Sr. Aarrass no sabe leer.
18. Después de menos de una hora de deliberaciones someras en el curso de las cuales los magistrados se negaron a tomar en cuenta los errores de procedimiento y las violaciones graves de los derechos de la defensa y del acusado, el Sr. Aarrass fue condenado a 15 años de cárcel.
19. Tras la interposición de un recurso de apelación por la víctima contra su condena, el Tribunal de Apelación de Salé redujo la pena inicial a 12 años de cárcel, también mediante un juicio sumario celebrado el 1 de octubre de 2012. El órgano de control se negó a tener en cuenta las denuncias de tortura formuladas por el acusado y a disponer un reconocimiento médico serio para establecer los hechos.
20. El 2 de mayo de 2011 el Sr. Aarrass decidió poner en conocimiento del secretario general del Consejo Nacional de Derechos Humanos las torturas a las que se lo había sometido mientras estaba en detención policial. Hasta la fecha, no ha obtenido respuesta alguna.
21. Sus abogados presentaron una queja ante el Comité contra la Tortura. El procedimiento está pendiente.

22. La fuente estima que la detención actual del Sr. Aarrass no puede interpretarse como una privación de libertad de carácter arbitrario de categoría III según la definición del Grupo de Trabajo. La privación de libertad del Sr. Aarrass constituye una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular los artículos 9, párrafos 1 y 4, y el artículo 14, párrafo 1. Asimismo, constituye una violación del artículo 23 de la Constitución de Marruecos.

23. La fuente informa de que el Sr. Aarrass fue torturado durante los diez días de detención policial en régimen de incomunicación con el objeto de extraerle declaraciones, que no tuvo representación letrada y que en ningún momento se le permitió ponerse en contacto con sus familiares. Se lo sometió a malos tratos y se lo privó deliberadamente de la protección de la ley para luego ser obligado a firmar confesiones con el objeto de utilizarlas como fundamento de las actuaciones penales y de su consiguiente condena.

24. La fuente considera que el juicio del Sr. Aarrass no reunió las debidas garantías y señala que en ningún momento del procedimiento de instrucción ni tampoco ante los tribunales este estuvo en condiciones de impugnar los fundamentos de los cargos que se le imputaron. La condena del Sr. Aarrass se basa exclusivamente en las actas de las investigaciones preliminares obtenidas en condiciones ilegales durante el período en que estaba recluso en régimen de incomunicación.

25. La fuente sostiene que los jueces se negaron a tener en cuenta las declaraciones del Sr. Aarrass según las cuales había sido torturado y obligado a firmar las actas sin comprender de que se trataban, cuando deberían haber tomado en consideración sus alegaciones y ordenado la apertura de una investigación.

Respuesta del Gobierno

26. En una carta de fecha 25 de junio de 2013, el Grupo de Trabajo pidió al Gobierno de Marruecos que le transmitiera toda la información que pudiera aportar en respuesta a las acusaciones mencionadas.

27. El Gobierno no respondió a esta carta ni ha solicitado una prórroga del plazo, como lo autorizan las disposiciones del párrafo 16 de los métodos de trabajo. En consecuencia, el Grupo de Trabajo estima que puede emitir con fundamento una opinión sobre la base de la información de que dispone.

Deliberaciones

28. La lectura de las alegaciones parece indicar que el Sr. Aarrass es perseguido por pertenecer a una red terrorista; que fue objeto de torturas y detención en régimen de incomunicación durante diez días; que no recibió asistencia letrada durante todo este período; que su condena se basó únicamente en las actas escritas en árabe, idioma que no comprende, y firmadas bajo coacción; que las acusaciones no se fundamentan en elementos materiales, en particular tratándose de la participación en una red terrorista y tráfico de armas; que el Tribunal de Apelación se negó a ordenar un reconocimiento médico para establecer si se habían cometido actos de tortura y que, hasta ese momento, el Consejo Nacional de Derechos Humanos al que se había presentado la cuestión no había respondido; y, por último que la queja presentada ante el Comité contra la Tortura aún estaba pendiente.

29. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya estimado necesario responder a alegaciones de naturaleza tan grave, en tanto que durante el mismo período respondió a otras comunicaciones, por lo cual el Grupo de Trabajo se felicita.

30. El Grupo de Trabajo agrega que el Comité contra la Tortura, en sus observaciones finales (CAT/C/MAR/CO/4, párr. 8) sobre el cuarto informe periódico presentado por Marruecos en noviembre de 2011, observó con preocupación que la Ley N° 03-03 de 2003

de lucha contra el terrorismo amplió a 12 días el plazo legal de detención en relación con asuntos de terrorismo y no permitía el acceso a un abogado más que al cabo de 6 días, con lo cual aumentaba el riesgo de que se sometiera a tortura a los sospechosos detenidos. El Grupo de Trabajo observa que precisamente en esos períodos, durante los cuales no pueden comunicarse con sus familias ni con sus abogados, hay más posibilidades de que los sospechosos sean objeto de torturas (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, arts. 2 y 11).

31. El Grupo de Trabajo señala que el Comité contra la Tortura indicó también en sus observaciones finales (CAT/C/MAR/CO/4, párr. 10) que estaba preocupado por las numerosas denuncias de tortura y malos tratos cometidos por los agentes de policía, los funcionarios de prisiones y más particularmente los agentes de la Dirección de Vigilancia del Territorio, reconocidos actualmente como agentes de la policía judicial, cuando se privaba a las personas de las salvaguardias jurídicas fundamentales, como el derecho de acceso a un abogado, en particular contra las personas que, según se sospechaba, pertenecían a redes terroristas o eran partidarias de la independencia del Sáhara Occidental o durante los interrogatorios con el objeto de extraer confesiones a los sospechosos de actos de terrorismo (Convención contra la Tortura, arts. 2, 4, 11 y 15).

32. El Grupo de Trabajo se remite a su opinión N° 40/2012.

33. Estas observaciones tienen por objeto corroborar las alegaciones mencionadas y, ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo estima que estas violaciones no fomentan un juicio justo e imparcial, con todas las garantías que exige el derecho internacional.

Decisión

34. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la opinión siguiente:

Sobre la base de estas observaciones, la detención y condena fundadas en confesiones obtenidas bajo tortura, sin elementos materiales o de otra índole, y sin que se hayan llevado a cabo investigaciones para determinar la sinceridad de las confesiones, contravienen los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en la categoría III de privación de libertad arbitraria a las que se refiere el Grupo de Trabajo al examinar los casos que se le presentan.

35. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de Marruecos que ponga inmediatamente en libertad al Sr. Aarrass y examine la posibilidad de ofrecerle una compensación adecuada por los daños sufridos. Asimismo, pide al Gobierno que en el futuro colabore en mayor grado con el Grupo de Trabajo, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.

[Aprobada el 28 de agosto de 2013.]